



# VIGÉSIMO INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (2013)

**Informe Final**

## **Veinte años de conflictividad ambiental en Costa Rica (1994-2013)**

*Investigadores:  
Karen Chacón  
Leonardo Merino*



**Nota: Las cifras de las ponencias pueden no coincidir con las consignadas por el Vigésimo Informe Estado de la Nación en el tema respectivo, debido a revisiones posteriores. En caso de encontrarse diferencia entre ambas fuentes, prevalecen las publicadas en el Informe.**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Resumen .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Principales hallazgos .....</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>Introducción.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>Consideraciones metodológicas .....</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>La protesta socioambiental en Costa Rica (1994-2013) .....</b> | <b>6</b>  |
| <b>Bibliografía.....</b>  | <b>14</b> |

## **Resumen**

Esta investigación analiza la conflictividad ambiental durante el período 1994-2013. Para ello se hace una revisión amplia de la base de datos sobre acciones colectivas del Programa Estado de la Nación y lo reportado sobre el tema en los veinte informes Estado de la Nación. El estudio profundiza en los principales factores que explican las tensiones entre la ciudadanía, grupos de la sociedad civil y el Estado en materia ambiental. Asimismo, con el objetivo de realizar una lectura más clara del tipo de acción colectiva que se da en Costa Rica por conflictos ambientales, se profundizó en los rasgos particulares que ésta presenta, y en los condicionantes y motivaciones para que grupos específicos de la sociedad se movilicen. Esto incluye el análisis de las coyunturas en las que se dieron los episodios de protesta social. Es decir, una revisión pormenorizada de los temas, actores, coaliciones y momentos históricos en las que se dieron estas manifestaciones para determinar si hay patrones comunes en estos episodios de movilización, y si las coyunturas en las que se dieron estas expresiones tienen características parecidas.

En el período bajo estudio la conflictividad ambiental mostró ritmos fluctuantes, la cantidad de protestas a lo largo de estos veinte años no fue constante, hubo años más activos que otros, siendo en los últimos cuatro (2009-2013) en los que se registra un mayor número de acciones colectivas en asuntos ambientales. Al mismo tiempo ha venido creciendo su peso en la conflictividad social, así pasó de representar el 1,8% del total en 1994 al 7% en 2013. Al analizar la información, se observa que el Estado continúa siendo el mayor generador de la protesta ambiental, además, el principal actor son los grupos de vecinos, en mayor medida incluso que los grupos ambientalistas, y cerca de un 40% de las acciones son emprendidas contra instituciones de base local (principalmente municipalidades y empresas privadas). En este sentido, se nota que la mayoría de los conflictos fueron generados por decisiones políticas de alto nivel, o bien por acciones u omisiones de entidades públicas y gobiernos locales (PEN, 2013). Por último, cabe destacar que las características de estas disputas confirman que en los últimos años es creciente la tensión por el uso de los recursos naturales y el territorio. Lo que evidencia la necesidad, entre otras cosas, de ordenar el territorio y de hacer un uso sostenible de los recursos tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.

## **Descriptor**

Acciones colectivas, conflictividad ambiental, protesta social, actores, instituciones, respuesta institucional, judicialización, Estado, vecinos, grupos ambientalistas, municipalidades, empresas privadas, declaraciones públicas, bloqueos, concentraciones, minería, exploración petrolera, actividad piñera, agua.

## **Principales hallazgos**

- ✓ Entre 1994 y 2013 se registraron 486 acciones colectivas en materia ambiental, un 5,8% del total a nivel nacional (8.415).

- ✓ Según la base de datos del Programa Estado de la Nación, las acciones colectivas en ambiente pasaron, en términos porcentuales, de un 1,8% en 1994 a un 7% en 2013.
- ✓ La protesta ambiental durante los últimos veinte años fue mayor que la reportada en temas como seguridad social, vivienda, igualdad de derechos y seguridad ciudadana.
- ✓ Del total de acciones colectivas reportadas en el período 1994-2013, un 63% se llevaron a cabo en los últimos cuatro años (2010-2013).
- ✓ Un 50% de las acciones registradas en esta área fueron impulsadas por los vecinos, en mayor medida que los grupos ambientalistas. Además, un 38,4% de las mismas se dirigieron contra instituciones de base local, principalmente, municipalidades y empresas privadas.
- ✓ El 76,1% de las protestas ambientales son directamente contra el Estado (ministerios, instituciones descentralizadas, Presidente de la República, Asamblea Legislativa y Poder Judicial). Además, el Estado sigue siendo el mayor generador de los conflictos socioambientales en el país.
- ✓ Las declaraciones públicas, los bloqueos y los mítines o concentraciones son los medios más usados (57,2% en conjunto) para realizar la protesta ambiental.
- ✓ Se mantiene la tendencia a la judicialización de los conflictos ambientales. En el período bajo estudio, un 17,5% de las acciones colectivas en asuntos ambientales se canalizaron en denuncias ante instituciones estatales o internacionales.
- ✓ El registro de acciones colectivas revela que en un 93,4% de las acciones colectivas en temas ambientales no se registra la presencia o el uso de la fuerza policial. Sin embargo, en los últimos años se reportan presiones contra actores ambientalistas.
- ✓ El análisis de la base de datos sobre acciones colectivas y lo reportado por los veinte informes Estado de la Nación muestra que, en general, los conflictos ambientales no suelen ser concentrados en el tiempo. Por el contrario, se observa que temas como la oposición a la minería a cielo abierto o a la exploración petrolera, los conflictos por el uso del agua o las denuncias por afectación de la actividad piñera pueden no estar presentes en un “pico”, sino que son constantes a lo largo de varios años.
- ✓ Los principales factores que impulsan la conflictividad ambiental son: la presión y competencia por los recursos naturales (dentro y fuera de las áreas protegidas), la resistencia al impacto de la actividad económica y las debilidades de la gestión pública en este campo.

## **Introducción**

Costa Rica enfrenta importantes desafíos para hacer un uso sostenible de sus recursos naturales y su territorio y para ampliar las oportunidades de desarrollo humano sostenible para su población. Bajo este panorama, la conflictividad social en torno a asuntos ambientales ha tomado –en años recientes- nuevas dimensiones. Si bien los conflictos alrededor de la gestión de los recursos naturales no son desconocidos, han adquirido características más complejas. Por un lado, en los últimos años se registra un aumento en la cantidad de acciones colectivas en esta materia, que se acompaña de una mayor diversidad de temas y actores. Por otro, cada vez más se observa una tendencia a la

judicialización que traspasa del ámbito nacional al internacional, con implicaciones que sobrepasan las ambientales, en un contexto en el que el Estado, en vez de actuar como mediador en los conflictos, contribuye a generarlos (PEN, 2013).

La protesta ambiental es una forma de organización de la sociedad civil y como tal guarda una estrecha relación con los procesos de participación ciudadana y de toma de decisiones. En ese sentido, el mayor número de protestas ambientales evidencia, entre otras cosas, una sociedad que da un mayor seguimiento a las acciones y decisiones políticas y técnicas en la gestión ambiental. Pero además, la creciente tensión y los altos niveles de protesta exhiben las dificultades de la institucionalidad ambiental para responder a las demandas de la población, resolver los conflictos y garantizar un estilo de desarrollo sostenible, así como un deterioro de la confianza por parte de la ciudadanía en dicha institucionalidad.

Por tanto, la defensa del ambiente se ha posicionado como un tema que cada vez más moviliza a la población, en mayor medida incluso que otros asuntos (seguridad social, igualdad de derechos, vivienda, etc.) que tradicionalmente han ocupado un lugar prioritario en la agenda de la conflictividad social del país. Aunque durante mucho tiempo se consideró que la conflictividad social era un asunto de espacios privados, y que las áreas protegidas estaban consolidadas, la realidad es que en los últimos años se observa una creciente tensión con respecto al uso de la tierra en áreas protegidas (PEN, 2013).

Pese a la existencia de un número importante de organizaciones, grupos o asociaciones que trabajan en temas ecológicos y a la mayor movilización registrada, la participación de los y las ciudadanas en el diseño, ejecución y seguimiento de medidas de protección y manejo responsable y el acceso a la información en esta materia sigue siendo una aspiración. Por tanto, el reto está en establecer mecanismos y procedimientos que garanticen el derecho a la participación, la capacidad de respuesta por parte del Estado y los canales de información.

### **Consideraciones metodológicas**

Para la elaboración de esta investigación se utilizó la base de datos de acciones colectivas que elabora el Programa Estado de la Nación, cuyo registro permite hacer por primera vez una descripción cuantitativa de la protesta social en este ámbito entre 1994 y 2013, y, con una visión más cualitativa, lo reportado por los veinte informes *Estado de la Nación*.

La base de datos se alimenta con un registro diario de las acciones colectivas (huelgas, bloqueos, manifestaciones, concentraciones o mítines, declaraciones públicas y otras) reportadas por tres medios de prensa escrita: Semanario Universidad, La Nación y Diario Extra. Para conocer en detalle la metodología puede consultarse la página [www.estadonacion.or.cr](http://www.estadonacion.or.cr). Aunque este esfuerzo no logra registrar todas las acciones, en especial las que se dan en el plano local, sí permite observar tendencias generales. Para contabilizar las acciones específicamente centradas en asuntos ambientales se identificaron las clasificadas bajo la categoría “medio ambiente” y además algunas cuyas demandas, si bien registradas en otras áreas temáticas, también tienen relación con el ambiente.

El manual de codificación de la base de datos contiene las siguientes variables: “tipo de acción colectiva”, “actor principal”, “forma de organización”, “existencia de alianzas”, “demanda principal”, “forma de organización”, “existencia de alianzas”, “demanda principal”, “categoría de la demanda”, “cobertura territorial de la demanda”, “solución propuesta a la demanda principal”, “entidad a la que se dirige la acción colectiva”, “respuesta de la entidad a la que se dirige la acción colectiva” y “formas de represión de la acción colectiva” (PEN, 2010). Tanto la base de datos como el manual han sido objeto de modificaciones para captar satisfactoriamente las particularidades de cada protesta (García, 2010).

Por otro lado, cabe indicar que según la metodología usada se consideran meses “pico” aquellos en los que el número de acciones colectivas se encuentra dos desviaciones estándar por encima del promedio de todo el período. En el caso del tema ambiental, eso significa meses en los que se reportan más de 6,71 protestas, es decir, a partir de siete registros.

### **La protesta socioambiental en Costa Rica (1994-2013)**

Desde hace varios años el Informe Estado de la Nación ha realizado acercamientos conceptuales y empíricos sobre la conflictividad socio-ambiental, con el propósito de entender los procesos sociales y políticos que acompañan la gestión en esta materia. En esta ocasión, esta investigación busca ampliar ese acercamiento realizando un análisis, desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, sobre la protesta ambiental en los últimos veinte años.

Al observar la serie de tiempo completa, 1994-2013, la imagen que se tiene sobre la movilización socio-ambiental del país es muy variable. En el período bajo estudio, aunque la cantidad de protestas no fue constante, en términos generales se registró un aumento en el número de acciones colectivas realizadas, con un mayor peso en los últimos cuatro años (2009-2013). Además de su aumento en años recientes, entre las características destacan la facilidad con que los asuntos ambientales cobran dimensión nacional y la tendencia a la que la sociedad civil acuda a la vía judicial para resolver estas controversias, en un contexto en el que el Estado se mantiene como el principal generador y en el cual destaca la actitud “proactiva” de los vecinos.

La conflictividad ambiental es parte de la protesta social en el país, y como tal muestra similitudes y diferencias. En primer lugar, tanto en este campo como en la generalidad de acciones colectivas se mantienen ritmos fluctuantes -que suelen crecer en la mitad de los períodos de gobierno-, y se dirigen fundamentalmente hacia las entidades del Estado. Pero por su lado, se diferencian en que sus principales conflictos no generan movilizaciones concentradas en el tiempo, sino que se desarrollan a lo largo de varios años con diferentes momentos en su nivel de actividad. Además, la principal carga de la protesta la llevan los actores locales, y no los gremios laborales, y se dirigen de manera más significativa a entidades con base local. Se trata de un tema de peso creciente en la conflictividad social del país, y que responde principalmente a la competencia por el uso de la tierra y los recursos, con ausencia de instrumentos adecuados para la toma de decisiones. Además, aunque el tema tenga raíces locales, escala con mucha facilidad al

nivel nacional, y adquiere respuesta en la prensa, las redes de sociedad civil y la población.

El tema ambiental ha estado presente en estos veinte años en la movilización social en niveles cambiantes. En algunos años tiene un peso marginal (en cantidad), si se compara con otros tópicos de protesta, pero con presencia creciente en la última década y con preponderancia por encima de otros temas tradicionalmente conflictivos. Tomando el período completo (1994-2013), el ambiente generó 486 acciones colectivas, de un total de 8.415 registros en todas las áreas (un 5,8%). Es una porción relativamente pequeña en comparación con otras demandas: trabajo y legislación concentran casi la mitad de acciones (47,9). Pertenece a un segundo grupo (que abarca casi el 30%) junto con educación, infraestructura y servicios públicos (cuadro 1). Su quinta posición coloca al tema ambiental como un generador de más acciones colectivas que otros aspectos como la igualdad de derechos, servicios públicos, seguridad social, vivienda o seguridad ciudadana.

### Cuadro 1

#### Número total de acciones colectivas, por tema. 1994-2013

| Tema                | Total        | Porcentaje   |
|---------------------|--------------|--------------|
| Trabajo             | 2.382        | 28,3         |
| Legislación         | 1.677        | 19,9         |
| Educación           | 609          | 7,2          |
| Infraestructura     | 511          | 6,1          |
| Medio Ambiente      | 486          | 5,8          |
| Servicios públicos  | 434          | 5,2          |
| Función pública     | 428          | 5,1          |
| Otros <sup>a/</sup> | 1.888        | 22,5         |
| <b>Total</b>        | <b>8.415</b> | <b>100,0</b> |

a/ Incluye: no registrados, participación, seguridad social, modelo de acumulación, igualdad de derechos, vivienda, seguridad ciudadana y otros.

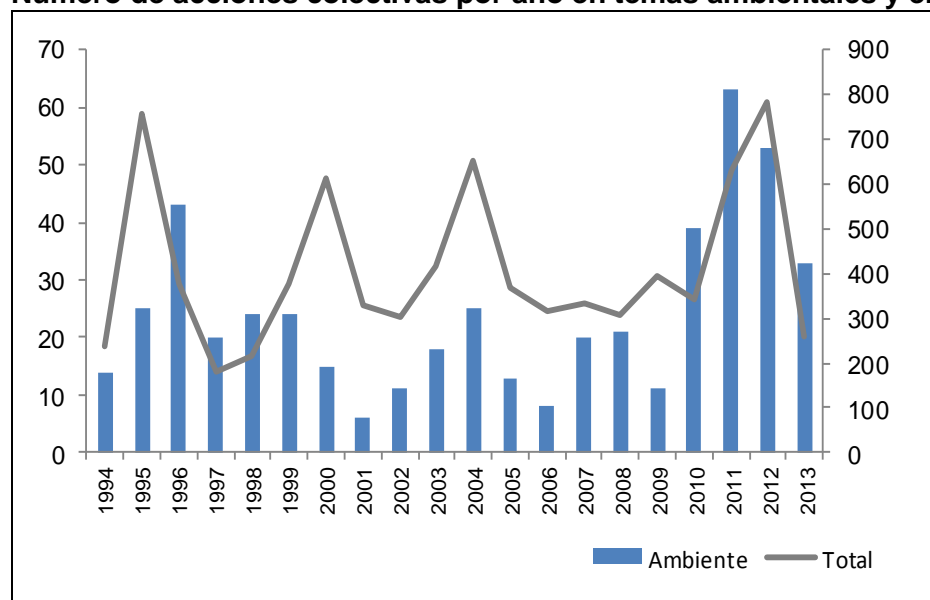
Fuente: elaboración propia con información de la base de datos de acciones colectivas del Programa Estado de la Nación.

Como se dijo, la presencia de lo ambiental en la movilización social es, además de relevante, creciente. Su peso dentro del total de acciones colectivas evidencia un incremento en la última década. Luego de un pico a mediados de los años noventa, desde el año 2001 la tendencia es, aunque variable, de un aumento notorio en el peso porcentual de esta área en las acciones colectivas del país (pasó de un 1,8% ese año a un 7,0% en el 2013). Esto es consecuente con lo planteado por teóricos recientes, como por ejemplo el enfoque del cambio cultural, que plantea la llegada de nuevos valores y temas como movilizadores políticos, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, de minorías y por supuesto los aspectos ambientales (Siavelis, 2006; Sulmont, 2010).

La movilización en ambiente tiene patrones similares a las tendencias generales de la conflictividad social en el país en estos veinte años. Al comparar el número de acciones colectivas por año (gráfico 1) se pueden concluir que el tema experimenta también en los últimos cuatro años el período de mayor número de protestas. Entre 2010 y 2013 se acumulan 188 registros, el 38,6% del total de ambas décadas, y un 63% de todas las que

se reportan en los 16 años previos. El año 2011 es el de mayor número de todo el período (63 registros). Aunque adelante se analizan las razones de esa movilización, lo cierto es que esto es consecuente con lo señalado en el *Decimonoveno Informe Estado de la Nación*, que reportó que desde el 2011 se vive su mayor episodio de conflictividad en esos veinte años, con más de 22 meses consecutivos de protesta por encima del promedio, y sin un tema movilizador único. El gráfico demuestra además que los picos de movilización suelen ser similares, y que esa coincidencia se expresa también en el período reciente con niveles sostenidos y altos de movilización social.

**Gráfico 1**  
**Número de acciones colectivas por año en temas ambientales y en todos los temas.**

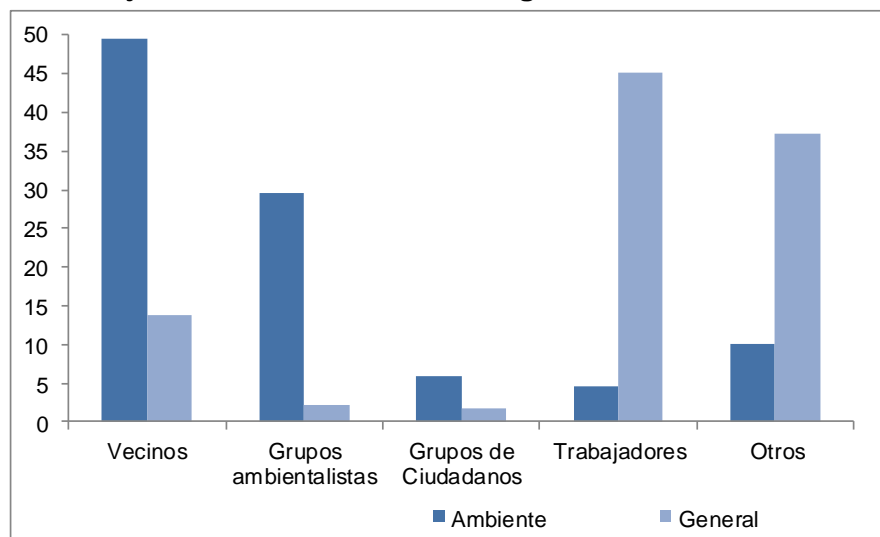


Fuente: elaboración propia con información de la base de datos de acciones colectivas del Programa Estado de la Nación.

Un aspecto que diferencia significativamente las acciones colectivas en medio ambiente con respecto al resto de los temas es el tipo de actor que lleva el peso de la movilización. En este campo, el carácter local del tema es notorio y se evidencia al comparar el porcentaje de acciones colectivas según actor. Como se ve en el gráfico 2, en esta área hay una mayoría significativa, casi la mitad, de acciones es impulsada por vecinos; más incluso que por grupos ambientalistas. En cambio, al ver la totalidad de temas, los gremios de trabajadores son el principal actor.



**Gráfico 2**  
**Porcentaje de acciones colectivas según actor. 1994-2013**



Fuente: elaboración propia con información de la base de datos de acciones colectivas del Programa Estado de la Nación.

Por otra parte, las acciones colectivas por el medio ambiente han sido generadas por acciones u omisiones del Estado, tal como se ha reportado en ediciones anteriores. Al tomar el total de registros para estos veinte años, se observa que la entidad a la que se dirige la acción colectiva es en un 19,5% de los casos empresas privadas; pero el 76,1% de ellas son directamente contra el Estado (considerando ministerios, municipalidades, gobierno en general, instituciones descentralizadas, Presidente de la República, Asamblea Legislativa y Poder Judicial). Cabe destacar que esta característica no es particular del campo ambiental; la protesta dirigida contra el Estado se da en un 89,2% de los casos al tomar la base general de acciones colectivas. Sin embargo, sí hay una diferencia sustancial en el carácter local del conflicto. En el tema ambiental, no solo los actores son principalmente locales, sino que el porcentaje de protestas dirigido a entidades con raíz local (municipalidades y empresas privadas) es también más significativo (38,4%, mientras en todos los temas es apenas del 10,6%, cuadro 2).

**Cuadro 2**  
**Acciones colectivas según entidad a la que se dirige. 1994-2013**

| Entidad a la que se dirige     | Ambiente |            | Todos los temas |
|--------------------------------|----------|------------|-----------------|
|                                | Total    | Porcentaje | Porcentaje      |
| Gobierno en general            | 79       | 16,3       | 27,1            |
| Ministerios                    | 94       | 19,3       | 23,9            |
| Instituciones descentralizadas | 50       | 10,3       | 16,8            |
| Asamblea Legislativa           | 19       | 3,9        | 7,7             |
| Municipalidad en general       | 92       | 18,9       | 6,4             |
| Presidente de la República     | 22       | 4,5        | 4,8             |
| Empresas privadas              | 95       | 19,5       | 4,2             |
| Poder Judicial                 | 14       | 2,9        | 2,5             |
| Otros                          | 21       | 4,3        | 6,7             |

|       |     |       |       |
|-------|-----|-------|-------|
| Total | 486 | 100,0 | 100,0 |
|-------|-----|-------|-------|

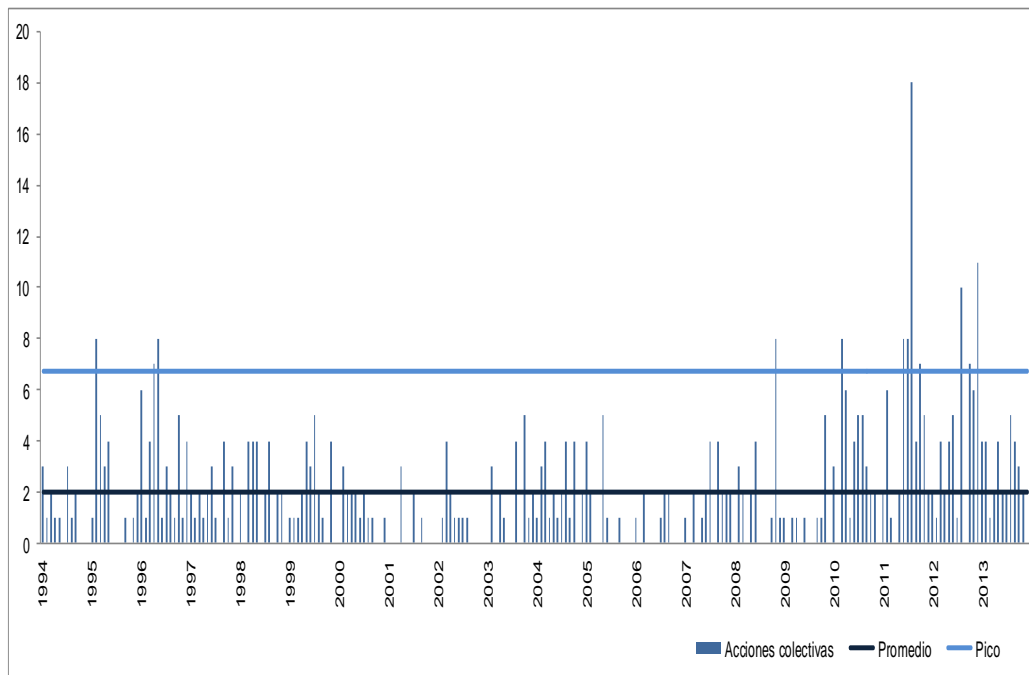
Fuente: elaboración propia con información de la base de datos de acciones colectivas del Programa Estado de la Nación.

Por último, los medios por los cuales se realiza la acción colectiva (lo que la base de datos cataloga como “repertorio de la acción”), también tiene particularidades. La totalidad general y las específicas de ambiente coinciden en que las declaraciones públicas, los bloqueos y los mítines o concentraciones acumulan el mayor porcentaje (juntos representan el 56,6% y 57,2% del total de acciones, respectivamente). Sin embargo, la diferencia es el tema ambiental se canaliza en un 17,5% en denuncia ante entidades estatales o internacionales, rubro que significa solo el 6,4% en el plano general. Cabe destacar que, según el registro de noticias, en un 93,4% de las acciones colectivas en temas ambientales no se registra represión (presencia o uso de la fuerza policial). Valdría la pena comparar la situación con respecto a otros países, en que la conflictividad ambiental está acompañada de alto grado represivo.

Como complemento a este análisis cuantitativo, se realizó un esfuerzo por identificar otros aspectos de fondo que caractericen la conflictividad ambiental en estos veinte años. Esto se hizo por dos vías: la primera fue tomar, de la base de datos de acciones colectivas, los meses que significan “picos” de movilización, y analizar los temas específicos que explican esa situación. En segundo lugar, se revisaron algunos ejemplos de conflictos reportados a lo largo de veinte ediciones del *Estado de la Nación*, para clasificar el tipo de elementos que está generando la ya reportada conflictividad creciente en esta materia.

En el gráfico 3 se pueden identificar un conjunto, relativamente pequeño de meses “pico” en acciones colectivas sobre medio ambiente. Estos se concentran principalmente en los cuatros años que ya se mencionaron como los más altos en movilización (2010-2013). En este nivel “pico” resaltan cuatro meses del 2011 (junio, julio, agosto y octubre), tres del 2012 (agosto, octubre y diciembre) y algunos más aislados: marzo del 2010, noviembre del 2008 y más atrás el caso de abril y mayo de 1996. Cabe resaltar que el período reciente es más intenso que los años previos: entre 2010 y 2013 se dio una alta proporción de todas las acciones colectivas (188, un 38,6% de las dos décadas), pero además, en esos cuatro años, un 56,2% de los meses estuvieron por encima del promedio de todo el período, en tanto en los 16 años anteriores solo un 21,8% de los meses tuvieron esa característica.

**Gráfico 3**  
**Acciones colectivas por mes en temas ambientales. 1994-2013**



Fuente: elaboración propia con información de la base de datos de acciones colectivas del Programa Estado de la Nación.

Como se dijo, los conflictos ambientales no suelen ser concentrados en el tiempo, sino que suelen tomar períodos largos de tiempo con acciones a veces más aisladas. Analizando estos meses “pico” y confrontándolo con los temas de mayor número de acciones colectivas, se puede observar algunos de ellos toman meses o años desde las primeras acciones hasta la resolución del conflicto. Por eso, grandes temas como la oposición a la minería a cielo abierto o a la exploración petrolera, los conflictos por el uso del agua o las denuncias por afectación de la actividad piñera pueden no estar presentes en un “pico”, sino que son constantes a lo largo de varios años. Del mismo modo sucede con los conflictos por el agua, que no están presentes en estos “picos” pero generaron 134 acciones colectivas solo entre 2000 y 2010 (ver recuadro 5.6 del Decimonoveno Informe *Estado de la Nación*). Esto es diferente a los “picos” generales de conflictividad del país, que suelen mostrar un alto número de movilizaciones centradas en un solo tópic (la huelga de maestros en 1995, el “combo” del ICE en el 2000, por ejemplo) y en poco tiempo, a excepción de los últimos tres años, como se mencionó anteriormente.

Por eso los “picos” no son en su mayoría motivados por un solo tema específico. Las excepciones son los de 1996, dos meses en que el tema de la basura y los rellenos sanitarios, desatado principalmente por el caso de Río Azul y las exigencias vecinales de cierre durante muchos años, hizo que se dieran movilizaciones similares en San Ana, Belén y Cartago. En agosto del 2011 también hay una concentración temática por algunas protestas locales contra la construcción de torres de telefonía celular, y a finales del 2012 dos meses reportaron una mayoría de acciones en torno a la oposición al aval para la siembra de cultivos transgénicos. Fuera de estos casos, la mayoría de picos combinan

temas diversos, como el tema de la construcción de infraestructura, la protección de fuentes de agua, la tala ilegal, la falta de agua, el aleteo del tiburón, los proyectos energéticos (geotermia, Diquís), la contaminación de cuerpos de agua, el ordenamiento territorial, entre otros.

Para finalizar, este capítulo ha venido reportando a lo largo de sus ediciones precedentes que los conflictos ambientales conforman “fronteras conflictivas” entre la protección y la actividad productiva. Al repasar los casos reportados por las veinte ediciones (cuadro 3), se percibe que la presión y competencia por los recursos naturales (dentro y fuera de las áreas protegidas), la resistencia al impacto de la actividad económica y las debilidades de la gestión pública en este campo son, a grandes rasgos, los principales impulsores de conflictividad.

### Cuadro 3

#### Tipos y casos de conflictos ambientales reportados por el Informe *Estado de la Nación*. 1994-2013

| Tipo de conflicto   | Algunos casos relevantes reportados por el Informe  |
|---|---|
| Reacción organizada ante impactos ambientales de actividades productivas              | Tala y afectación de suelos para actividades de minería (Crucitas, Bella Vista, Talamanca)<br>Contaminación de aguas y afectación de suelos por la actividad piñera (Siquirres, Pococí)<br>Contaminación por aguas residuales y por desechos de acuicultura (San Pedro, Alajuela, Santa Cruz, Osa, Cañas).<br>Contaminación por arsénico en fuentes de abastecimiento de agua<br>Impacto del desarrollo inmobiliario y turístico (Osa, Santa Cruz, Pacífico central, GAM)<br>Afectación de causes por el funcionamiento de tajos y canteras<br>Afectación de humedales, manglares y cuerpos de agua por la actividad agrícola (Térraba-Sierpe, Caño Negro, Caletas, otros)<br>Afectación de zonas protegidas por la construcción de la “trocha fronteriza”<br>Tala ilegal en bosque y en ASP<br>Cacería ilegal (Osa, otros)<br>Aleteo del tiburón<br>Saqueo de huevos de tortuga y afectación de zonas de anidación |
| Oposición a proyectos productivos públicos o privados con potencial impacto ambiental | Aval público al desarrollo de cultivos transgénicos<br>Oposición a proyectos hidroeléctricos (Pacuare, La Joya, Diquís, Los Gemelos, la Virgen de Sarapiquí, otros).<br>Oposición a la construcción de torres de telecomunicaciones<br>Oposición a la exploración y explotación petrolera (empresa Mallon Oil).<br>Proyectos de ley de energía<br>Oposición a la construcción de marinas y atracaderos, granjas atuneras y otras infraestructuras en la ZMT<br>Oposición a permisos de exploración minera en Talamanca<br>Proyecto de construcción de aeropuerto (Osa)<br>Posibles impactos del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EEUU  |
| Competencia por el uso del recurso hídrico y la protección de sus fuentes             | Concesiones y prioridades de uso del recurso entre sectores productivos y comunidades (Monteverde, Nimboyores, Sardinal, Barva de Heredia, otros)<br>Presión por el uso de ríos (Sarapiquí)<br>Conflictos por abastecimiento de agua potable a la población<br>Protección y delimitación de nacientes   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Invasión de humedales y manglares por actividad agrícola y otras (Caño Negro, Térraba-Sierpe, Caletas, otros)</p> <p>Extracción ilegal de aguas subterráneas</p> <p>Actualización de normativa (Ley de aguas, carácter público y derecho humano)</p>  |
| <p>Presión por el uso o por el cambio de restricciones en áreas silvestres protegidas o zonas de patrimonio legalmente establecidas</p> | <p>Delimitación de ASP (RNVS Ostional, Las Baulas, Isla San Lucas)</p> <p>Traslapes de límites en ASP y otras zonas: (Península de Osa, Corcovado)</p> <p>Conflictos de ocupación y tenencia de la tierra en ASP (RNVS Ostional)</p> <p>Titulación irregular de humedales y manglares (Térraba-Sierpe)</p> <p>Conflictos por pago de tierras y precio de la tierra en expropiaciones (caso Unglaube, Manuel Antonio)</p> <p>Conflictos de concesiones irregulares y ocupación de la ZMT</p> <p>Proyectos para permitir explotación geotérmica en parques nacionales</p> <p>Problemas sociales, desalojos y demoliciones en la ZMT por ocupación irregular (Gandoca-Manzanillo, RVS Ostional, RF Golfo Dulce)</p> <p>Autorizaciones de uso de terrenos por municipalidades en ZMT (Golfito)</p> <p>Conflictos por el acceso y ocupación de playas de dominio público y ZMT</p> <p>Titulaciones irregulares y proyectos para uso económico en Islas</p> <p>Conflicto entre pescadores y Sinac por pesca en ASP o ampliación de estas</p> <p>Delimitación del Patrimonio Natural del Estado</p> |
| <p>Problemas de gestión ambiental pública en general</p>  | <p>Desechos sólidos (deficiente gestión de los municipios).</p> <p>Comercialización y transporte de combustibles</p> <p>Recolección de residuos sólidos</p> <p>Manejo, creación y ubicación de vertederos y rellenos sanitarios</p> <p>Manejo y control de aguas residuales y requerimientos de infraestructura</p> <p>Abastecimiento de agua potable</p> <p>Gestión de la Setena en estudios de impacto ambiental y control ambiental</p> <p>Planes reguladores y zonificación territorial</p> <p>Conflictos de competencia por rectorías y permisos entre entidades del sector ambiental</p> <p>Cierre sanitario de Parque Nacional Manuel Antonio</p> <p>Propuestas de cambio en el anillo de contención de la GAM</p> <p>Manejo y conservación de fauna silvestre</p>  |
| <p>Otros</p>  | <p>Subsidios de combustibles</p> <p>Maltrato animal.</p>   |

En el cuadro anterior se pueden identificar situaciones sociales complejas que generan conflictividad, y que lanzan importantes retos en la integración de las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo humano. Algunas de ellas denotan que parte de los conflictos derivan de las pocas apuestas productivas que tienen su foco en el marco rural, y que significan empleo para áreas sumamente rezagadas. Otras ponen evidencia una compleja situación en cuanto la sostenibilidad energética, pues a la par de la necesidad de aumentar la capacidad de usar fuentes limpias y reducir la dependencia del petróleo en el país, no hay consensos y acuerdos políticos para enfrentar el tema. Y por último, también se evidencia a alta vulnerabilidad de la conservación, tradicional fortaleza del país, por la multiplicidad de presiones en torno a los límites y usos del patrimonio natural. Todo lo anterior demuestra la necesidad de construir espacios de diálogo político e instrumentos participativos para la toma de decisiones informadas.

## **Bibliografía**

- Merino, L. y Sol, R. 2005. *Elementos sobre la participación de la sociedad civil en la gestión ambiental. Ponencia preparada para el Undécimo Informe Estado de la Nación*. San José: Programa Estado de la Nación.
- Paniagua, F. 2006. *Conflictos socio-ambientales en Costa Rica: situación actual y perspectivas. Ponencia preparada para el Duodécimo Informe Estado de la Nación*. San José: Programa Estado de la Nación.
- Paniagua, F. 2007. *Caracterización de los conflictos socio-ambientales en Costa Rica 2006. Ponencia preparada para el Decimotercer Informe Estado de la Nación*. San José: Programa Estado de la Nación.
- Programa Estado de la Nación. 2010. *Decimosexto Informe Estado de la Nación*. San José: Programa Estado de la Nación.
- Programa Estado de la Nación. 2013. *Base de datos sobre acciones colectivas en Costa Rica 1994-2013*. San José: Programa Estado de la Nación.
- Programa Estado de la Nación. 2013. *Decimonoveno Informe Estado de la Nación*. San José: Programa Estado de la Nación.
- Rodríguez, T. 2009. *Conflictos socioambientales en zonas de frontera, los casos de Osa y Crucitas durante el año 2008. Ponencia preparada para el Decimoquinto Informe Estado de la Nación*. San José: Programa Estado de la Nación.
- Pujol, R. 2009. *Realidades, actores, conflictos y desafíos ambientales en el Gran Área Metropolitana. Ponencia preparada para el Decimoquinto Informe Estado de la Nación*. San José: Programa Estado de la Nación.